

VIABILIDAD JURÍDICA DE LA INTERNACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS DE  
MATRÍCULA VENEZOLANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA  
COMO ZONA DE FRONTERA CON EL ESTADO TÁCHIRA.



Presentado por

MERLY YAZMÍN ESCALANTE OLARTE  
DANIA YADITH HERNÁNDEZ SANTIAGO  
ÁLVARO JESÚS SILVA COLMENARES

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA  
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES  
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO  
CÚCUTA, COLOMBIA

2018

VIABILIDAD JURÍDICA DE LA INTERNACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS DE  
MATRÍCULA VENEZOLANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA  
COMO ZONA DE FRONTERA CON EL ESTADO TÁCHIRA.

Presentado por:

MERLY YAZMÍN ESCALANTE OLARTE  
DANIA YADITH HERNÁNDEZ SANTIAGO  
ÁLVARO JESÚS SILVA COLMENARES

Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de Especialista en Derecho  
Administrativo.

Asesor disciplinar

MICHELLE ANDREA NATHALIE CALDERON ORTEGA

Asesor metodológico

DARWIN CLAVIJO CÁCERES

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA  
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES  
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO  
CÚCUTA, COLOMBIA

2018

VIABILIDAD JURÍDICA DE LA INTERNACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS DE  
MATRÍCULA VENEZOLANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA  
COMO ZONA DE FRONTERA CON EL ESTADO TÁCHIRA.

Merly Yazmín Escalante Olarte<sup>1</sup>  
Dania Yadith Hernández Santiago<sup>2</sup>  
Alvaro Jesús Silva Colmenares<sup>3</sup>

Resumen

A partir del Decreto 2229 del 2017 expedido por el Ministerio de Transporte se regulariza el tránsito de vehículos extranjeros, especialmente automóviles venezolanos, en las zonas de frontera con el fin de establecer condiciones, términos y requisitos para solicitar la internación temporal en la Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo. En consecuencia, el presente trabajo analiza, desde la perspectiva jurídica, la viabilidad de la internación temporal de vehículos con matrículas venezolanas en el Municipio de San José de Cúcuta. Para realizar lo anterior, el trabajo se desarrolla en tres capítulos que estudia la normativa sobre internación de vehículos extranjeros; la forma como se debe adelantar el procedimiento de internación y las dificultades que presenta el trámite objeto de estudio.

Palabras claves:

Internación de vehículos, Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, importación, vehículos, motocicletas, embarcaciones fluviales, Régimen de Internación Temporal.

---

<sup>1</sup> Abogada. Estudiante de la Especialización en Derecho Administrativo – Universidad Libre – Sede Cúcuta.

<sup>2</sup> Abogada. Estudiante de la Especialización en Derecho Administrativo – Universidad Libre – Sede Cúcuta.

<sup>3</sup> Abogado. Estudiante de la Especialización en Derecho Administrativo – Universidad Libre – Sede Cúcuta.

### Abstract

As of Decree 2229 of 2017 issued by the Ministry of Transportation, the transit of foreign vehicles, especially Venezuelan cars, is regularized in the border areas in order to establish conditions, terms and requirements to request temporary admission into the Special Units of Border Development. Consequently, this paper analyzes, from a legal perspective, the viability of the temporary internment of vehicles with Venezuelan license plates in the Municipality of San José de Cúcuta. To do the above, the work is developed in three chapters that study the regulations on the entry of foreign vehicles; the way in which the hospitalization procedure should be advanced and the difficulties presented by the procedure under study.

### Keywords:

Vehicle internment, Special Border Development Units, import, vehicles, motorcycles, river boats, Temporary Admission System.

## INTRODUCCION

En Colombia la presencia de vehículos con matrícula venezolana fue una constante en las zonas de frontera que limitaban con el país vecino antes del 2015, año en el que de manera unilateral por parte del Gobierno Nicolás Maduro se cerró la frontera (Castellanos, 2015, En: CNN), anulando de cierto modo la circulación de estos vehículos en territorio nacional; no obstante, el cierre fronterizo para vehículos no fue una barrera para que en Colombia siguieran ingresando carros y motocicletas con placas venezolanas.

San José de Cúcuta, municipio que se caracteriza por ser la principal ciudad fronteriza en Colombia por su dinámica comercial y cultural (García, 2011, p. 28), presenta en su parque automotor un mayor número de vehículos y motocicletas venezolanas (Secretaria de Tránsito de Cúcuta, En: Diario La Opinión, 2017). Por eso, la industria automotora se ha visto perjudicada ante la masiva compra de vehículos venezolanos que resultan de menor costo en relación con los precios nacionales (Ojeda, En: El Espectador, 2018). Igualmente, el recaudo por concepto de impuesto de rodamiento es mínimo en vista a los pocos vehículos matriculados en la ciudad de Cúcuta (Andrade, En: La Opinión, 2016).

La circulación de vehículos y motocicletas venezolanas en la ciudad de San José de Cúcuta de alguna forma afecta el crecimiento económico del municipio dado que estos vehículos no pagan impuestos al Municipio; situación que se vive en todos los municipios fronterizos colombianos con Venezuela. Sin duda, los menores costos de la industria automotora de Venezuela es un atractivo para el comprador colombiano, que observa en el mercado internacional una posibilidad de desplazarse por la ciudad de manera más económica. Lo anterior, se ha convertido en un problema público para los entes territoriales, que no han diseñado acciones para frenar la entrada de vehículos venezolanos a territorio colombiano.

Por tanto, el Gobierno Nacional a través de la concertación con las entidades locales expidió el Decreto 2229 del 2017 con el objeto de frenar el crecimiento automotriz extranjero en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo. (Decreto 2229, 2017). Lo anterior generó un dilema a los propietarios y posibles compradores de vehículos venezolanos, pues, el decreto

regulaba de manera temporal la internación de vehículos venezolanos en territorio colombiano, estableciendo un plazo máximo de 7 años para circular en el territorio nacional. (Decreto 2229, 2017).

Lo dicho hasta aquí supone que la internación de los vehículos con matrículas venezolanas es una medida nacional para combatir la comercialización y movilización de los automotores extranjeros en los territorios locales que se ven afectados en el recaudo de impuestos y no crecimiento de la industria automotor.

Sin embargo, en la actualidad, la ejecución del acto administrativo que reglamenta la internación de los vehículos extranjeros en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo se encuentra suspendido (Rojas, 2018, En: Diario La Opinión), en el sentido que las administraciones locales no han iniciado los proyectos necesarios para iniciar con la labor encomendada por el Decreto 2229 del 2017.

Por otra parte, la ambivalencia que permite la norma reglamentaria ha generado controversias entre el Municipio de San José de Cúcuta y el Departamento de Norte de Santander, principalmente por el recaudo del impuesto de rodamiento, aspecto que la norma no destinó de manera precisa. (El Tiempo, 2018).

Estas situaciones han impedido la ejecución del decreto, hecho que ha permeado de inseguridad jurídica y desconfianza a la administración municipal. La población en general demuestra un descontento frente a la medida, sustentado en la falta de pedagogía de la administración pública y el poco pronunciamiento institucional sobre el mismo, lo que evidencia la inexperiencia del Gobierno Nacional y el Gobierno Local frente al tema.

De lo anteriormente, expuesto surge la siguiente pregunta problema: ¿Qué viabilidad jurídica tiene la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en los municipios de San José de Cúcuta como zona fronteriza con el estado Táchira?

Para determinar la viabilidad jurídica que tiene la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el Municipio de San José de Cúcuta por ser zona fronteriza con el estado Táchira, se ha realizado un examen de lo establecido en la normatividad colombiana respecto a la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el municipio de San José de Cúcuta como zona de frontera con el estado Táchira; se ha identificado la forma en que debe adelantarse el trámite para la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el municipio de San José de Cúcuta como zona de frontera con el estado Táchira; y se han establecido las dificultades jurídicas que han impedido la implementación de la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el municipio de San José de Cúcuta como zona de frontera con el estado Táchira.

El análisis de la viabilidad jurídica que tiene la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el Municipio de San José de Cúcuta por ser zona fronteriza con el estado Táchira, es una investigación documental-jurídica, por tratarse de una investigación documental, con enfoque será cualitativo, estuvo fundamentada en la normatividad y los documentos relacionados con la internación temporal de vehículos venezolanos en las zonas fronterizas con Colombia.

El desarrollo del trabajo se ha estructurado en tres capítulos, en el primero se presenta un examen de lo establecido en la normatividad colombiana respecto a la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el municipio de San José de Cúcuta como zona de frontera con el estado Táchira, en el segundo, se identifica la forma en que debe adelantarse el trámite para la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el municipio de San José de Cúcuta como zona de frontera con el estado Táchira, y, en el tercero se establecen las dificultades jurídicas que han impedido la implementación de la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el municipio de San José de Cúcuta como zona de frontera con el estado Táchira.

## VIABILIDAD JURÍDICA DE LA INTERNACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS DE MATRÍCULA VENEZOLANA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COMO ZONA DE FRONTERA CON EL ESTADO TÁCHIRA.

Los conceptos de globalización, integración y frontera son vinculantes entre sí, y suelen ser relacionados entre ellos, tal como lo describen Guacaneme & Avendaño (2015, p. 163):

Stiglitz (2006) define globalización como sinónimo de integración “producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las fronteras” (p. 45).

A su vez, Clavijo (2012), cita a Montoya (2010), para quien la globalización es:

Un proceso que denota diferentes aspectos enmarcados dentro de distintos grados de complejidad, con un enfoque o aspecto pluralista, que impone una supuesta apertura de fronteras en la que pareciera que los más favorecidos son los países desarrollados, y los que más ventajas tienen son los países subdesarrollados (...) (p. 106).

Analizando los anteriores conceptos, se considera que el cierre de frontera decretado por el Presidente venezolano Nicolás Maduro en el año 2015 y que actualmente impide el paso de vehículos, va en total contravía de los procesos de integración y globalización de ese país con Colombia, lo que afecta en especial a los departamentos y municipios que integran las zonas fronterizas, como es el caso puntual de la ciudad de Cúcuta, capital del Departamento Norte de Santander.

El Departamento Norte de Santander (Colombia) y el Estado Táchira (Venezuela) comparten una de las fronteras más grandes de Latinoamérica<sup>4</sup>, y que además es considerada como “la frontera más dinámica de sur América” (Ramírez, 2008, p. 34). Sin embargo, por la

---

<sup>4</sup> La frontera entre el Estado Táchira de Venezuela y el Departamento Norte de Santander de Colombia es una de las más dinámicas de América Latina y la de mayor movimiento de personas y mercancías entre ambos países. (Sánchez, 2010, p. 1).



cercanía de algunos municipios, como es el caso de San José de Cúcuta (Colombia), y Pedro María Ureña – San Antonio (Venezuela), el tráfico de vehículos venezolanos se convirtió en una situación del día a día, incluso se puede decir que ni siquiera el cierre de frontera decretado por el Presidente venezolano Nicolás Maduro en el año 2015, ha podido frenar el ingreso de vehículos venezolanos a Cúcuta, así lo evidencia un informe periodístico del Diario La Opinión (2017):

El ingreso de carros venezolanos a Cúcuta continúa a pesar de las restricciones legales y geográficas existentes. Esto se evidencia en las calles de la capital nortesantandereana, en donde se ve como aumenta el tránsito de vehículos con placas del país vecino, algunos de ellos modelo 2016 y 2017.

El número de vehículos venezolanos que a diario circulan por las calles de la ciudad de Cúcuta, es indeterminado, sin embargo en el año 2016, de acuerdo con las cuentas de los empresarios, se calcula que “en Cúcuta hay 185 mil carros, y de estos 120 mil son del vecino país”. (Diario La Opinión, 2016).

La anterior situación no es nueva en esta zona fronteriza, sino que por el contrario ha sido un problema que se ha mantenido en el tiempo a pesar de los esfuerzos hechos por el Gobierno Nacional por dar una solución al mismo, lo cual ha quedado evidenciado en diferentes normas, como el artículo 24 de la Ley 191 de 1995, que establece con respecto a la integración de vehículos lo siguiente:

Artículo 24. El Gobierno Nacional podrá autorizar la internación temporal de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula del país vecino, a los residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo<sup>5</sup>, cuando sea solicitado por éstos, previa comprobación de su domicilio en la respectiva Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo.

---

<sup>5</sup> Son unidades especiales de desarrollo fronterizo de los siguientes departamentos: Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y Vichada. (Artículo 2, del Decreto 1814 de 1995).

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones, términos y requisitos que deben cumplir para el otorgamiento del correspondiente permiso de internación temporal.

Los vehículos automotores, motocicletas y embarcaciones fluviales menores internadas temporalmente sólo podrán transitar en las jurisdicciones de los departamentos de Amazonas, Arauca, Cesar, Chocó, Guainía, Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y Vichada, dependiendo de la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo donde haya sido autorizada la respectiva internación temporal.

Los vehículos automotores, motocicletas y embarcaciones fluviales menores, de nacionales o residentes de las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, para circular en el resto del territorio nacional deberán someterse a las disposiciones aduaneras que regulan el régimen de importación. (Ley 191, 1995, p. 9).

Posteriormente, en el año 1997 surge el Decreto 2560 que restringía la circulación de vehículos con placas extranjera en zona de frontera, derogado el mismo año por el Gobierno mediante el Decreto 2680 de 1997. El Decreto 2560 de 1997, establecía lo siguiente en lo referente a la internación de vehículos:

Artículo 1. Competencia para autorizar la internación temporal. El administrador de impuestos y aduanas nacionales, el administrador de aduanas nacionales, el administrador de impuestos nacionales o el administrador delegado con jurisdicción en los departamentos que tienen zona de frontera, autorizarán, cuando se cumplan los requisitos señalados en el presente decreto, la internación temporal de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula de un país vecino, a las personas naturales residentes en los municipios de los departamentos que tienen zona de frontera, para que circulen únicamente en el territorio del departamento para el que se confirió la autorización, de conformidad con los plazos, las condiciones y los requisitos previos en el presente decreto. (Decreto 2560, 1997).

En el año 2000, es expedida la Ley 633, que en su artículo 85, establece que las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo expedirán la autorización de internación de vehículos a los que se refiere el artículo 24 de la Ley 191 de 1995, así como establece que la internación de vehículos causará anualmente y en un 100% a favor de las unidades especiales de desarrollo fronterizo, el impuesto de vehículos automotores de que trata la Ley 488 de 1998.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, esta normativa no fue aplicada, por lo que veinte años después el Gobierno Nacional nuevamente revive el tema de la internación temporal de vehículos extranjeros en las zonas de frontera colombianas a través de la expedición del Decreto 2229 de 2017, considerando que se hace necesario adicionar un título a la parte 3 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015, con el fin de reglamentar las condiciones, términos, y requisitos para autorizar la internación temporal de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula del país vecino, a los residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, en la cual se define la competencia para autorizar la internación temporal de vehículos así:

Artículo 2.3.11.2.1. Competencia para autorizar la internación temporal. El Alcalde del municipio en cuya jurisdicción se encuentra la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo correspondiente al domicilio del solicitante, autorizará, la internación temporal de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula del país vecino, de propiedad de los residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo donde tiene jurisdicción. (Decreto 1079, 2015).

Como se aprecia actualmente la internación temporal de vehículos se encuentra reglamentada por el artículo 24 de Ley 191 de 1995, y el Decreto 2229 de 2017, sin embargo, aún su implementación no se concretado en lo que corresponde al Municipio de San José de Cúcuta, por lo cual conviene examinar la viabilidad jurídica que tiene la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el Municipio de San José de Cúcuta por ser zona fronteriza con el estado Táchira.

La normativa colombiana respecto a la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el municipio de San José de Cúcuta como zona de frontera con el estado Táchira (Venezuela)

El andamiaje normativo sobre internación de vehículos extranjeros en zonas de frontera es un esquema relativamente antiguo, pero cortó. Desde la Constitución Política de 1991 se observa un especial interés constituyente por preservar y promover las regiones fronterizas, así lo evidencia, por ejemplo, el artículo 85, 289, 300, y 337 de la Carta Magna (Constitución Política, 1991). En consecuencia, la internación de vehículos extranjeros en Colombia parte de un sustento constitucional que obliga al legislador dictar las medidas legislativas pertinentes para proteger particulares zonas.

Respecto a la internación de vehículos de manera temporal en la zona de frontera de la ciudad de Cúcuta, se cita como normativa aplicable desde la perspectiva constitucional el artículo el artículo 289:

ARTICULO 289. Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. (Constitución Política, 1991).

Esta norma resultó ser un adelanto para su época por su conexión con el concepto de globalización, en vista que permite integrar las entidades territoriales de dos países diferentes ubicadas en zonas de frontera a fin de desarrollar políticas públicas en conjunto que impacte positivamente en su progreso. A causa de esta norma las autoridades administrativas de ambos países pueden adelantar amparados en el mandato constitucional convenios interadministrativos que faciliten la internación de vehículos extranjeros, realizando cruces de datos que ahorren al interesado trámites excesivos.

Además, es ajustable en el contexto constitucional la norma 337: “La Ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo” (C.P; 1991). Habilita la Constitución de 1991 al legislador para que regule aspectos económicos y sociales que beneficien el progreso de los territorios fronterizos a través de medidas que ajusten su realidad a los fines del Estado Social de Derecho. Por tanto, el legislador cuenta con el poder constitucional para establecer normas legales respecto a la internación de vehículos extranjeros.

Corolario de lo anterior, el artículo 24 de la Ley 191 de 1995, faculta al Gobierno Nacional para autorizar la internación temporal de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula del país vecino, a los residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, cuando sea solicitado por éstos, previa comprobación de su domicilio en la respectiva Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo, así como a reglamentar las condiciones, términos y requisitos que deben cumplir para el otorgamiento del correspondiente permiso de internación temporal. (Ley 191, 1995).

El legislador en su potestad regulatorio dispuso en manos de la Rama Ejecutiva la disponibilidad para reglamentar la internación de los vehículos con matrícula extranjera en el territorio colombiano. En otras palabras, el Congreso de la República se desentendió de la regulación, estableciendo únicamente el límite geográfico para su tránsito, respecto a la demás habilitó al Gobierno Nacional para su reglamentación.

Sobre dicho comportamiento legislativo la Corte Constitucional se pronunció:

El Congreso de la República, en uso de la cláusula general de competencia, podía fijar los procedimientos mínimos para efectos de obtener la autorización para internar temporalmente un vehículo con matrícula de un país vecino en las denominadas zonas fronterizas, sin que por ello se hubiese desconocido mandato constitucional alguno. Como en esta materia la Constitución no asigna expresamente a otra autoridad su regulación, el legislador tenía plena facultad de regularla. Al tiempo que el presidente de la República conserva su competencia para reglamentar todos aquellos aspectos que considere

necesarios para efectos de desarrollarla y cumplirla adecuadamente. (Sentencia C-076, 1997).

En ese sentido, la Corte Constitucional encontró ajustable a la Carta Magna el mandato legislativo respecto a la internación de vehículos extranjeros, manteniendo el contenido legal en su integridad.

Por otra parte, la Ley 191 de 1995 fue fundamento para que el Ejecutivo estableciera por medio del Decreto 1814 de 1995 las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, constituyendo en dicha figura a los siguientes departamentos: Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y Vichada. (Ley 191, 1995).

El decreto reglamentario hace parte de la normativa para la internación de los vehículos extranjeros porque permite identificar los territorios donde el trámite correspondiente será aplicable. Por consiguiente, se habilita a estos territorios para que puedan transitar vehículos con placas extranjeras.

En materia de impuesto, el artículo 141 de la Ley 488 de 1998, señala que se encuentran gravados con el impuesto sobre vehículos automotores, los vehículos automotores nuevos, usados y los que se internen temporalmente al territorio nacional, salvo las excepciones que contempla la citada disposición. Así las cosas, el sistema normativo colombiano grava a los vehículos que se internen temporalmente al territorio nacional; Esta norma indica que a partir de la internación de dichos vehículos los mismos causaran un impuesto a favor de las entidades locales. (Ley 488, 1998).

Una norma importante dentro del entramado que regula la internación de vehículos extranjeros se identifica en la Ley 633 del 2000. Contempla que las unidades especiales de desarrollo fronterizo expedirán la autorización de internación de vehículos a los que se refiere el artículo 24 de la Ley 191 de 1995, así como establece que la internación de vehículos causará

anualmente y en un 100% a favor de las unidades especiales de desarrollo fronterizo, el impuesto de vehículos automotores de que trata la Ley 488 de 1998.

Artículo 85. Las unidades especiales de desarrollo fronterizo expedirán la autorización de internación de vehículos a los que se refiere el artículo 24 de la Ley 191 de 1995. La internación de vehículos causará anualmente y en su totalidad a favor de las unidades especiales de desarrollo fronterizo el impuesto de vehículos automotores de que trata la Ley 488 de 1998.

El Ministerio de Transporte fijará la tabla de avalúo de los automotores en estas zonas. (Ley No 633; 2000)

Por su parte, otras normas que intervienen indirectamente con la regularización de los vehículos extranjeros en el territorio nacional es la Ley 769 de 2002, en su artículo 42, establece que todo vehículo para poder transitar en el territorio nacional debe estar amparado por un seguro obligatorio vigente. (Ley 769, 2002).

Adicionalmente, el párrafo del artículo 52 de la Ley 769 de 2002 modificado por la Ley 1383 de 2010 y Decreto 019 de 2012, señala que los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. (Ley 769, 2002).

Finalmente, se expidió el Decreto 2229 del 2017 con el fin de reglamentar las condiciones, términos, y requisitos para autorizar la internación temporal de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula del país vecino, a los residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo. (Decreto 2229 del 2017).

En conclusión, desde el aspecto normativo la internación de vehículos extranjeros en el Municipio de San José de Cúcuta cuenta con todas las condiciones legales y reglamentarias para ser llevado a cabo sin mayores requerimientos jurídicos. Son muchas las normas de distinta índole jerárquica que sustenta sustancial y procesalmente el trámite previsto para la

regularización del tránsito de los vehículos extranjeros en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo. En ese sentido, la internación de vehículos extranjeros en la ciudad de Cúcuta es viable normativamente.

Forma en que debe adelantarse el trámite para la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el municipio de San José de Cúcuta como zona de frontera con el estado Táchira (Venezuela)

El Decreto 2229 del 2017 es la norma reglamentaria que de manera puntual recoge el procedimiento para internar los vehículos de matrícula venezolana de manera temporal. Por eso, los propietarios de los vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula en el país vecino deberán atender los requerimientos del Decreto, so pena que su automotor sea incautado por las autoridades competentes. (Decreto 2229 del 2017).

El competente para adelantar el procedimiento para la internación de los vehículos es el alcalde del municipio en cuya jurisdicción se encuentra la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo correspondiente al domicilio del solicitante. La norma es clara en advertir que la autorización de tránsito posibilita para que el vehículo, motocicleta o embarcación fluvial menor pueda movilizarse únicamente en la jurisdicción del departamento que pertenece la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo. Para lo anterior, se emitirá una autorización de internación temporal de los vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula del país vecino. Este será el documento aduanero que ampara su circulación y tránsito en la jurisdicción del departamento al que pertenece la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo. (Decreto 2229 del 2017).

Para iniciar el procedimiento administrativo que autoriza la internación de los vehículos de los países que limitan con Colombia el propietario deberá antes del ingreso al territorio nacional presentar solicitud ante el alcalde de la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo, anexando los siguientes documentos:



1. Fotocopia del documento de identificación del solicitante, indicando si posee doble nacionalidad.
2. Fotocopia del documento que acredite la propiedad del vehículo, motocicleta o embarcación fluvial menor, de conformidad con las normas vigentes en el país vecino.
3. Certificación expedida por la autoridad competente del país vecino, en la que conste la legalidad de la matrícula o registro, según corresponda, del bien que se pretende internar.
4. Para vehículos, Certificado de Revisión Técnica de Identificación de Automotores expedida por la SIJIN, en la que conste que el vehículo no tiene alterados sus sistemas de identificación y que las características del mismo corresponden a la marca, modelo y que el vehículo no se encuentra reportado como hurtado en sus bases de datos.
5. Improntas de los números de VIN, chasis y motor (si cuenta con este número), que identifiquen el vehículo o de los seriales de identificación de la motocicleta o embarcación fluvial menor.
6. Para las embarcaciones fluviales menores, autorización de permanencia en el país, expedido por la Capitanía de Puerto del Departamento por donde arribó la embarcación.
7. Cuando se trate de vehículos, certificación expedida por autoridad competente del país vecino, en la que conste que el vehículo no tiene alterados sus sistemas de identificación y que las características del mismo corresponden a la marca, modelo y que el vehículo no se encuentra reportado como hurtado en sus bases de datos. (Decreto No 2229; 2017)

Lo anteriores documentos se pueden describir por sus intenciones normativas de la siguiente manera: Por un lado, se verifica la capacidad legal de la persona para poder adquirir vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales en los países vecinos, motivo por el cual se solicita el documento de identidad, si posee doble nacionalidad y el documento que acredite la propiedad del vehículo. A su vez, mediante los documentos que verifica la integridad de los números de identificación del vehículo se infiere la necesidad de contrastar que el automotor no

es hurtado o se encuentra alterado para su reconocimiento. Desde esas dos vertientes se encuentra justificado los lineamientos documentales del ejecutivo sobre la internación de los vehículos.

Una vez recibida la solicitud el funcionario competente deberá verificar que el domicilio del solicitante corresponda a la jurisdicción de la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo para poder expedir la Internación Temporal, dicha Unidad únicamente podrá exigir los documentos y requisitos relacionados. (Decreto 2229 del 2017).

Ahora bien, para la expedición de la autorización de internación vehicular, una vez el funcionario competente verifique el cumplimiento de los documentos exigidos, le informará al interesado la obligación de cancelar el impuesto sobre vehículos automotores, para que allegue una fotocopia del pago y del SOAT; se debe agregar la fotocopia de la certificación de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes vigente de conformidad con lo dispuesto en la Ley. (Decreto 2229 del 2017).

En cuanto a la renovación de la autorización de internación vehicular establece el Decreto 2229 del 2017:

Para los casos de renovación de la autorización de internación temporal, se requerirá presentar fotocopia de los formularios del impuesto de vehículos automotores, con la constancia del pago, correspondientes a los periodos gravables durante los cuales ha contado con la Internación Temporal. De igual forma fotocopia del SOAT vigente excepto en el caso de embarcaciones fluviales menores y en el evento que aplique, fotocopia de la certificación de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes vigente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 769 de 2002 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. (Decreto No 2229; 2017)

El procedimiento para autorizar la internación de los vehículos con matrícula venezolana se torna sencillo en vista a que son tres las etapas que se desarrollan para expedir la respectiva autorización de tránsito. En ese sentido, la primera etapa administrativa se concentra en

presentar la solicitud, con los documentos exigidos por la norma; posteriormente, se inicia un proceso interno por parte de la administración municipal, quien deberá constatar el cumplimiento de los documentos solicitados a fin de proseguir con la autorización de internación vehicular. Finalmente, se allegan los documentos del SOAT y la técnico-mecánica del vehículo, documentos requeridos para que el automotor se ajuste a las normas nacionales para poder transitar por las jurisdicciones correspondientes. (Decreto 2229 del 2017).

En conclusión, el trámite en el ámbito nacional para internar los vehículos de matrícula extranjera son sencillos en vista de que se cumple al amparo de los principios de eficacia y eficiencia, sin la necesidad de trámites excesivos o inoperantes para la consecución de la autorización de internación. Lo anterior no quiere decir que la internación vehicular es un trámite sencillo, ya que, gran parte de los documentos que se requieren por parte de la administración nacional son expedidos por los países vecinos. En el caso de la ciudad de Cúcuta este proceso es más complejo por el cierre fronterizo que se presenta desde hace tiempo entre Colombia y Venezuela.

Dificultades jurídicas que han impedido la implementación de la internación temporal de vehículos de matrícula venezolana en el municipio de San José de Cúcuta como zona de frontera con el estado Táchira (Venezuela)

El Decreto 2229 del 2017 ha generado diversas controversias en el Municipio de San José de Cúcuta, hasta la fecha, el acto administrativo no ha sido ejecutado por el ente territorial, por lo que su aplicación se encuentra suspendida. Esto demuestra que frente a la normativa se originan distintas dudas de índole jurídica, las administraciones municipales no tienen la certeza jurídica para iniciar los trámites correspondientes. A causa de lo anterior, el primer impase jurídico que enfrenta el acto administrativo es el señalado en el artículo 2.3.11.2.2 en el parágrafo transitorio 1:

Los vehículos, motocicletas o embarcaciones fluviales menores, que correspondan a modelos matriculados hasta el día 19 de agosto de 2015, que ingresaron desde la República

Bolivariana de Venezuela a territorio Colombiano y que se encuentran circulando en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo colindantes con esta frontera, sin tener la autorización de internación temporal respectiva, deberán proceder a solicitarla ante la autoridad competente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del presente decreto, cumpliendo los requisitos establecidos en el presente artículo, con excepción de los numerales 3 y 7. (Decreto No 2229; 2017)

El Decreto fue publicado el 27 de diciembre del 2017 terminando el tiempo para la solicitud de internación para aquellos vehículos que ingresaron antes del cierre fronterizo el 28 de junio del 2018. Teniendo en cuenta que ya ha transcurrido más de la mitad del tiempo establecido en el Decreto, siendo palpable que hasta el momento no se ha dispuesto el aparato institucional para llevar acabo estos procesos y que hasta el momento ninguna solicitud se ha presentado para expedir el documento aduanero es evidente el no cumplimiento del plazo destinado.

A lo anterior, se debe sumar que la mayoría de los vehículos que transitan en la ciudad de San José de Cúcuta ingresaron antes de la fecha señalada, es decir, el 19 de agosto de 2015. Esto replantea varios escenarios jurídicos respecto al decreto, el principal, es que se debe expedir otro acto administrativo reglamentario que modifique el párrafo transitorio No 1, con el objeto de modificar su plazo o eliminarlo.

Otro problema jurídico que presenta el Decreto 2229 del 2017 es que solicita documentos que expiden las autoridades administrativas del Estado de Venezuela, hecho normativo que complica la autorización de internación vehicular por la difícil tensión que se presenta en la zona de frontera. Esta norma no es armónica con el artículo 289 de la Constitución Política, que establece la posibilidad de adelantar alianzas administrativas con la entidad limítrofe del país vecino. La celebración de convenios interadministrativos entre ambos países agiliza el proceso de internación vehicular, evitando a los interesados tramites complicados y demorados, simplemente se necesitaría una alianza de intercambio de información entre ambos países.

Lo anterior, impone la expedición de un decreto a nivel nacional que complemente lo relacionado al intercambio de información respecto a la identificación del vehículo o la motocicleta. Es claro que la reglamentación para ello debía expedirla el Gobierno Nacional ya que debe entenderse que debe existir una reglamentación uniforme para todas las Unidades Especiales pues, de lo contrario, existirían tantas reglamentaciones como criterios existentes en las distintas Unidades.

En mérito de lo expuesto, se evita una excesiva carga administrativa a los propietarios de vehículos y motocicletas venezolanas que hasta el momento deben desplazarse hasta al país vecino para obtener los documentos que contempla el Decreto 2229 del 2017.

Aunado a lo anterior, el Decreto 2229 del 2017 no se ajusta a la realidad porque gran parte de las personas que poseen un vehículo o motocicleta con matrícula venezolana no es el propietario del automotor en razón a que no tienen la doble nacionalidad para adquirir los vienen en territorio extranjero. En otras palabras, la modalidad para la adquisición de estos vehículos es recurrir a un tercero, por lo general un natal venezolano para realizar la compra en debida forma. Muchas de estas personas no mantuvieron el contacto con las personas que promovieron la compra de los carros y motos, por lo cual acceder a la autorización de internación resulta un imposible.

En relación con el recaudo del impuesto de rodamiento se presenta un cruce de intereses entre los municipios y el departamento que se ubica en la zona de fronteras, a saber:

De conformidad con lo establecido en las Leyes 488 de 1998 y 633 de 2002, por cada vehículo Internado Temporalmente se deberá cancelar el Impuesto sobre vehículos automotores, en la oportunidad y el monto contemplados en las mismas, ante la Secretaría de Hacienda del Departamento, en donde esté ubicada la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo que expida la respectiva autorización de Internación Temporal. (Decreto No 2229; 2017)

Aunque, el decreto estableció el recaudo del impuesto a favor de los departamentos fronterizos en concordancia con la ley, los municipios sostienen que dicha contribución debe dirigirse a favor de sus arcas públicas, ya que, son ellos los que tienen la carga administrativa de llevar a cabo estos procesos de autorización de internación.

Un aspecto normativo que se considera negativo del Decreto 2229 del 2017 es que la autorización de internación temporal se concederá solo por un (1) vehículo, motocicleta o embarcación fluvial menor, por residente. Sumado a esto que el término por el cual se concederá la autorización de la internación temporal de los vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula de un país vecino, será hasta por cinco (5) años, prorrogable por una sola vez por un término de dos (2) años, de conformidad con las normas que rigen la materia.

En ese sentido, los vehículos que acrediten la autorización de internación solo podrán transitar en el territorio nacional por un término de 7 años. Esta medida tiene como función sacar dentro del territorio nacional la presencia de tanto vehículo extranjero en los territorios de frontera. No obstante, atenta contra el principio de confianza legítima, pues, las reglas de juego se modificaron de manera perjudicial para los propietarios.

## CONCLUSIONES

Desde el aspecto normativo la internación de vehículos extranjeros en el Municipio de San José de Cúcuta cuenta con todas las condiciones legales y reglamentarias para ser llevado a cabo sin mayores requerimientos jurídicos. Son muchas las normas de distinta índole jerárquica que sustenta sustancial y procesalmente el trámite previsto para la regularización del tránsito de los vehículos extranjeros en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo. En ese sentido, la internación de vehículos extranjeros en la ciudad de Cúcuta es viable normativamente.

El trámite en el ámbito nacional para la internación de los vehículos de matrícula extranjera, son sencillos en vista a que se cumple bajo los principios de la eficacia y la eficiencia, sin la necesidad de trámites excesivos o inoperantes para la consecución de la autorización de internación. Lo anterior no quiere decir que la internación vehicular es un trámite sencillo, ya que, gran parte de los documentos que se requieren por parte de la administración nacional son expedidos por los países vecinos. En el caso de la ciudad de Cúcuta este proceso es más complejo por el cierre fronterizo que se presenta desde hace tiempo entre Colombia y Venezuela.

El procedimiento para autorizar la internación de los vehículos con matrícula venezolana se torna sencillo en vista a que son tres las etapas que se desarrollan para expedir la respectiva autorización de tránsito. En ese sentido, la primera etapa administrativa se concentra en presentar la solicitud, con los documentos exigidos por la norma; posteriormente, se inicia un proceso interno por parte de la administración municipal, quien deberá constatar el cumplimiento de los documentos solicitados a fin de proseguir con la autorización de internación vehicular. Finalmente, se allegan los documentos del SOAT y la técnico-mecánica

del vehículo, documentos requeridos para que el automotor se ajuste a las normas nacionales para poder transitar por las jurisdicciones correspondientes.

Finalmente, la viabilidad jurídica del Decreto 2229 del 2017 se encuentra afectada por la vulneración del principio de confianza legítima, ya que, el poder ejecutivo reglamento la internación de los vehículos extranjeros sin el más mínimo marco de transición que permitiera a los administrados ajustar sus derechos a las nuevas reglas administrativas contempladas.



## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, C. (2016). El impuesto a vehículos. En: La Opinión. Recuperado de: <https://www.laopinion.com.co/columna-de-opinion/el-impuesto-vehiculos-108892>
- Barbosa Restrepo, M. F. (2016). ¿Países hermanos?: La relación bilateral entre Colombia y Venezuela en medio de los cierres fronterizos: 2005-2015. Pontificia Universidad Javeriana.
- Castellanos, L. (2015). Tensión en la frontera. Venezuela ordena el cierre de la frontera con Colombia por 72 horas. CNN. Recuperado de: <http://cnnespanol.cnn.com/2015/08/20/venezuela-ordena-el-cierre-de-la-frontera-con-colombia-por-72-horas/>
- Clavijo Cáceres, D. (2012). Pluralismo en tiempos de globalización. Revista Academia & Derecho, 3 (4), 77-96. Universidad Libre Seccional Cúcuta.
- Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá, D.C. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991.
- Colombia. Congreso de la República. (1995). Ley 191 (Junio 23). Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera. Diario Oficial 41.903, de 23 de junio de 1995.
- Colombia. Congreso de la República. (1998). Ley 488 (Diciembre 24). Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales. Diario Oficial 43.460 del 28 de diciembre de 1998.
- Colombia. Congreso de la República. (2000). Ley 633 (Diciembre 29). Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial. Diario Oficial 44275 de diciembre 29 de 2000.
- Colombia. Congreso de la República. (2002). Ley 1383 (Marzo 16). Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 47.653 de marzo 16 de 2010.
- Colombia. Congreso de la República. (2002). Ley 769 (Agosto 06). Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. Diario oficial 44893 del 7 de agosto de 2002 y 44.932 de septiembre 13 de 2002.

- Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-076 de 1997, Magistrado ponente: Dr. Jorge Arango Mejía.
- Colombia. Presidencia de la República. (1995). Decreto 1814 (Octubre 26). Por el cual se determinan las Zonas de Frontera y las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo. Diario Oficial No. 42.064, del 26 de octubre de 1995
- Colombia. Presidencia de la República. (1997). Decreto 2560 (Octubre 17). Por el cual se establecen las condiciones, términos y requisitos para autorizar la internación temporal de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores en los departamentos que tienen zona de frontera y se reglamenta el procedimiento respectivo. Diario Oficial N°:43152 de octubre 20 de 1997.
- Colombia. Presidencia de la República. (1997). Decreto 2680 (Noviembre 5). Por el cual se deroga el Decreto 2560 del 17 de octubre de 1997. Diario Oficial N°:43168 de noviembre 7 de 1997.
- Colombia. Presidencia de la República. (2012). Decreto 019 (Enero 10). Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Diario Oficial No. 48308 del 10 de enero de 2012.
- Colombia. Presidencia de la República. (2015). Decreto 1079 (Mayo 26). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. Diario Oficial No.49523 del 26 de mayo de 2015.
- Colombia. Presidencia de la República. (2017). Decreto 2229 (Diciembre 27). Por el cual se adiciona un Título a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con las condiciones, términos, y requisitos para autorizar la internación temporal de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula del país vecino, a los residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo.
- Diario La Opinión. (13, octubre, 2017). Un clamor al Gobierno por la internación de vehículos. Obtenido de: <https://www.laopinion.com.co/economia/un-clamor-al-gobierno-por-la-internacion-de-vehiculos-141842>
- Diario La Opinión. (22, abril, 2016). Regularización: a contar carros venezolanos. Obtenido de: <https://www.laopinion.com.co/cucuta/regularizacion-contar-carros-venezolanos-110546#OP>

- El Tiempo. (2018). Alcaldes demandarían regulación de vehículos extranjeros en frontera. A través del decreto 2229 de 2017, el Gobierno Nacional ordenó la internación de estos automotores. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/impuesto-por-vehiculos-con-placa-extranjera-en-la-frontera-con-venezuela-169258>
- García Fernández, J. L. (2011). Desarrollo de la ciudad de San José de Cúcuta, en el marco de la integración binacional colombo-venezolana. Entre la Integración Comercial Binacional y el Desarrollo Local. Universidad Nacional de Colombia.
- Guacaneme Pineda, R. E. & Avendaño Castro, W. R. (2015). El concepto de globalización en la jurisprudencia colombiana (2000-2014). Análisis jurisprudencial en tres cortes colombiana: Constitucional, Suprema de Justicia y Consejo de Estado. Revista Academia & Derecho, Año 6 (11), 155-182.
- López Granados, C. C. (2011). Análisis del proceso de consolidación de la zona de integración fronteriza entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el Estado de Táchira (Venezuela) en el periodo de 1987 al 2007. Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.
- López Martínez, N. L. (2013). Informe sobre la incidencia de la importación temporal de vehículos de turistas en la frontera colombo – ecuatoriana. Universidad Antonio Nariño.
- Ojeda, D. (2018). Estas son las apuestas de la industria automotriz para 2018. En: El Espectador. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/economia/estas-son-las-apuestas-de-la-industria-automotriz-para-2018-articulo-738189>
- Ramírez, S (2008). Colombia y sus vecinos. Nueva Sociedad 192, 145-156. Obtenido de: [http://www.nuso.org/upload/articulos/3214\\_1.pdf](http://www.nuso.org/upload/articulos/3214_1.pdf)
- Rojas, C. (2018). Alcalde de Cúcuta pide revocar decreto de internación de vehículos. Diario La Opinión. Recuperado de: <https://www.laopinion.com.co/cucuta/alcalde-de-cucuta-pidio-revocar-decreto-de-internacion-de-vehiculos-146492>
- Sánchez Chacón, F.J. (2010). La frontera Táchira (Venezuela) - Norte de Santander (Colombia) en las relaciones binacionales y en la integración regional. Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, Volumen XI / No 1 / 2011 / pp. 63-84.

Sayago Rojas, P. R. (2016). Impacto socioeconómico a un año del cierre de la frontera Colombo-Venezolana: Norte de Santander – Estado Táchira (2015-2016). Revista Mundo FESC Núm. 12 (2016).

Secretaría de Tránsito de Cúcuta. (2017). Placa-día y pico y placa: las dos fórmulas que entrarán a regir el 2 de mayo. Diario La Opinión. Recuperado de: <https://www.laopinion.com.co/cucuta/placa-dia-y-pico-y-placa-las-dos-formulas-que-entraran-regir-el-2-de-mayo-131183>

Stiglitz, J. (2006). El malestar de la globalización. Madrid: Taurus.